



## **Transparencia y capacidad de respuesta para contener la pandemia**

Por: Dra. Eneida Torres de Durand  
Directora Ejecutiva  
Centro de Gobernanza Pública y Corporativa

Nuevamente una crisis, en esta ocasión de salud pública, pone a prueba nuestra capacidad de trabajar juntos ante un desafío común. En estos momentos el gobierno enfrenta la titánica y desafiante tarea de atender esta crisis pandémica y al mismo tiempo mitigar la posibilidad de un descalabro económico. Hacer frente a los desafíos que vivimos nos presenta la oportunidad de hacer bien las cosas que hay que hacer y hacerlas de manera diferente en beneficio de todos.

De modo que, debemos tomar esta amenaza en serio y estar dispuestos a enfrentarla de manera racional y científica. Por ello, para que la respuesta sea efectiva el gobierno tiene que ganarse la confianza de la sociedad proveyendo información transparente y oportuna y educar a la ciudadanía para que protejan su salud. Es momento para una lección de altruismo y trabajo conjunto.

Las medidas severas y valientes tomadas hasta el momento por el gobierno, aún con sus desaciertos, son un paso en la dirección correcta que requieren el respaldo y el apoyo de todos. No obstante, es fundamental asegurarnos que la respuesta atiende con celeridad el diagnóstico; que la coordinación de los esfuerzos sea congruente; y que

existan líneas claras para tomar decisiones y financiamiento específico para conseguir la mejor ejecución posible y salvar vidas. La intervención pública debe ser coherente mediante protocolos de prevención, de seguridad y de vigilancia y un flujo de comunicación actualizada y constante con la sociedad.

### **Transparencia y rendición de cuentas para construir confianza**

Frente a la cruda realidad que vivimos, mientras el gobierno y el sistema de salud protege las vidas de las personas y contiene el avance de la epidemia, urge implantar acciones para mitigar cuanto antes los efectos y el posible impacto que esta crisis pueda producir en las empresas, el empleo, el sistema financiero y las finanzas públicas. Los esfuerzos que como sociedad hagamos para contener la epidemia, generar confianza y salvaguardar nuestra estabilidad social y económica con medidas de corto, mediano y largo plazo no pueden esperar.

Sin embargo, las epidemias, los desastres naturales y las crisis humanitarias son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. La revisión de la literatura existente plantea que para enfrentar la crisis de manera efectiva es necesario combatir la corrupción, incluyendo las modalidades de fraude y soborno que le restan oportunidades de acceso a servicios a las poblaciones más vulnerables y a la gobernabilidad por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Las experiencias recientes de los estudios realizados por los organismos internacionales evidencian una lamentable lista de casos donde existió corrupción luego de una crisis. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se estima que la corrupción genera una pérdida entre un 10% y un 25% del valor de los contratos públicos además de afectar la calidad de los bienes y servicios. A modo de ejemplo, en el huracán Katrina en Nueva Orleans se calcula que el 16% del total de la ayuda (US600M y US14 billones) se perdieron en actividades indebidas.

Transparencia Internacional (TI) señala que en condiciones normales la corrupción en el sector de la salud genera pérdidas anuales de \$500 millones. TI plantea que hay distintos factores que explican por qué este sector está más expuesto a los riesgos de integridad. El sector de la salud por naturaleza es complejo y opera en un ambiente donde predomina la asimetría de información entre oferta y demanda, y los mercados no siempre son abiertos y competitivos. En este contexto la transparencia y la rendición de cuentas tienen un rol central especialmente para que los ciudadanos puedan acceder a información de calidad y actualizada sobre el uso de los recursos públicos.

Conforme a las investigaciones, la corrupción en el sector de la salud abarca desde el fraude en la construcción de hospitales, las prácticas indebidas de prescripción de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios,

hasta violentar la reglamentación y las normativas vigentes para la aprobación de ciertos servicios y medicamentos. Existen razones contundentes para creer que este porcentaje es mucho mayor en situaciones de emergencia. Un reciente estudio del Banco Mundial (BM) sobre la corrupción en el sistema de salud estima que al menos 10-25% del gasto mundial se pierde directamente a través de la corrupción, lo que representa cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año.

En el caso de Puerto Rico, luego de los huracanes Irma y María la prensa local y el Washington Post reportaron que el Programa de reconstrucción de Puerto Rico enfrentó serias acusaciones e investigaciones de corrupción de las agencias responsables de la gestión de la emergencia a nivel local y federal. También durante la emergencia ocasionada por los sismos que nos afectaron en el área sur del país surgieron serios cuestionamientos al manejo de los almacenes de equipo y suministros que impidieron un acceso ágil para satisfacer las necesidades esenciales de los ciudadanos. Al presente en esta emergencia del coronavirus hay investigaciones en curso para aclarar las aparentes irregularidades planteadas por la Secretaria Interina del Departamento de Salud en el proceso de compra y distribución de las pruebas para el diagnóstico de pacientes. Por tal razón, es imperativo contar con información pública y bases de datos abiertos que permitan a los ciudadanos conocer qué se está comprando, a quiénes se está comprando y a qué precio.

### **Capacidad de respuesta**

Una vez más, una crisis en esta ocasión pandémica pone a prueba nuestras capacidades de gobernanza y de planificación para crisis y atención a la salud pública. El momento exige la movilización de todos los sectores de la sociedad para el desarrollo efectivo de capacidades institucionales, de educación y de comunicación. También es una prueba para la capacidad de los ciudadanos y las comunidades en términos de sus principios, valores y competencias para propiciar el bien común. Por ello, las alianzas juegan un papel clave en el éxito de la respuesta por lo que deben intensificarse y ampliarse.

En esta instancia el gobierno ejerce un liderazgo crucial en los procesos de preparación, respuesta y de intervención con los individuos afectados, además de sensibilizar sobre los riesgos y las posibles consecuencias para la salud. También, es responsable de difundir información fidedigna y oportuna de los avances de la epidemia y las medidas que se deben adoptar y de ganar la confianza de los ciudadanos y generar conciencia en ellos sobre la amenaza del virus y los cuidados preventivos a seguir. Asimismo, debe explicar con claridad los esfuerzos que se están realizando y por qué las medidas propuestas son las correctas para detener la propagación del virus y preservar la salud pública.

Por su parte, los ciudadanos tienen el deber de ser prudentes, de informarse, de seleccionar cuidadosamente sus fuentes de información y de ejercer juicio crítico de la

calidad de la información que reciben. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar, fiscalizar y mantener la alerta sin generar pánico y respetando la privacidad y el bienestar de los individuos afectados con la enfermedad. Las organizaciones de la sociedad civil, las familias, los individuos y los líderes comunitarios y empresariales desempeñan una función esencial en la preparación, la mitigación y la respuesta.

## **Reflexiones finales**

Hoy más que nunca debemos advertir que la gobernanza pública precisa del compromiso y de la vocación de servir de sus líderes. Para enfrentar esta epidemia de coronavirus de forma exitosa, es apremiante transparentar la información pública para construir confianza y generar credibilidad para propiciar la acción ciudadana. Informar en casos de crisis de salud pública no es solo una necesidad para los ciudadanos sino también una obligación por parte del gobierno. Es vital que los líderes políticos atiendan el bien común y no su interés particular para ganarse la confianza de la sociedad. No podemos ceder espacio para protagonismos y luchas político-partidistas que solo obstaculizarán la capacidad de respuesta.

A medida que la epidemia continúa extendiéndose, es importante transparentar la información y tener discusiones abiertas y francas sobre las capacidades de nuestro sistema de salud y las vulnerabilidades que lo hacen más susceptible a la corrupción. Urge actuar con mayor transparencia para mejorar la adquisición de medicamentos, equipo médico y suministros, fomentar las contrataciones abiertas y transparentes, evitar el aumento ilegal de precios de medicamentos y suministros médicos y compartir la información y los datos de manera oportuna. Igualmente, importante es mejorar la divulgación de los datos de las pruebas realizadas, prevenir la propagación de información falsa y reducir el riesgo de soborno en hospitales, proveedores de servicios y centros de salud. Por último, es necesario reducir la influencia de los intereses privados y es esencial que el gobierno tome mejores decisiones en favor del bien público y la salud y no de los intereses políticos o empresariales.

Hacer frente a esta crisis pandémica nos recuerda que vivimos en una sociedad interconectada. Es momento de actuar conforme a los principios y valores de generosidad, solidaridad y compasión que nos distinguen como sociedad. No podemos distraernos con culpabilidades y heroicidades que solo trabajan en contra de la humanidad. La disciplina y el rigor con la que enfrentemos esta emergencia nos dará la oportunidad de salir fortalecidos y juntos desarrollar los cursos de acción impostergables requeridos para superar esta crisis, reconstruir el país y aprender lecciones para el futuro. Con perseverancia, desprendimiento y voluntad superaremos este desafío.

Marzo 2020